

**E**

Editorial

A convivir también se aprende...

El Mineduc presentó nuevos lineamientos para mejorar los vínculos escolares.

Los casos de violencia y de mala convivencia escolar son un tema que traspasa las fronteras de los establecimientos educacionales. Inquieta a las familias, daña la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, perjudica la seguridad de los docentes y desvía la atención de las comunidades hacia temas alejados de la calidad de la educación, la disminución de brechas y acceso igualitario a la enseñanza.

Por otra parte, su ocurrencia es también un reflejo de aquello que se vive en los entornos sociales. Si dentro de los hogares no hay resolución pacífica de conflictos; si los menores crecen en barrios atrapados por la delincuencia; si los adultos validan comportamientos abusivos; lo más lógico es que alumnos y alumnas trasladen esas vivencias a las salas de clases, generando desafíos de convivencia que los colegios no pueden resolver por completo, tampoco rápido, ni solos. Menos aún después del daño emocional y el desapego que se generó durante los años de pandemia.

Desde esta perspectiva, entonces, es válido señalar que se trata de un tema para abordar con mucha colaboración ciudadana y considerando las realidades que cada comunidad educativa tiene. Ese es, precisamente, el enfoque que marca la nueva Política Nacional de Convivencia Educativa (PNCE), presentada este lunes por el Ministerio de Educación y que orientará acciones hasta 2030 en todo el territorio nacional. La iniciativa incluye un documento central, 42 medidas y doce cartillas que se irán aplicando paulatinamente, invitando al diálogo, validando acciones que profundicen el respeto y reforzando la idea que "A Convivir Se Aprende". Coincidentemente, esa frase es, además, el nombre de un programa que ya se encuentra en ejecución en diversas regiones del país, incluyendo a Los Ríos, aplicado por el equipo de Valoras UC, que ha logrado buenos resultados, de acuerdo a sus primeras evaluaciones.

En la región hay, además, una labor conjunta con las autoridades y hasta con las policías, para garantizar entornos seguros para los recintos educacionales. Tal como publicó Diario Austral en su edición de ayer, se ha gestionado incluso la vigilancia con drones para detectar focos de inseguridad o posible presencia de vendedores de drogas, otro tema que -lamentablemente- no se puede descuidar.